

Santiago, uno de agosto del año dos mil veintitrés.

Se complementa acta de audiencia de fecha 14 de julio de 2023, incorporándose con esta fecha el texto íntegro de la sentencia dictada.

RIT M-1958-2023

RUC 23-4-0486252-9

M.S.H.

Santiago, catorce de julio de dos mil veintitrés.

Vistos, oídos y considerando:

PRIMERO: En cuanto a la acción. Que ha comparecido **JONNATHAN DANIEL PAREJA ARIAS**, cesante, RUT 18.991.664-7, con domicilio en con domicilio en pasaje Albornoz sin número, sector Vara Gruesa, comuna de Linares, quien presenta demanda en procedimiento monitorio en contra de **ABARROTES ECONÓMICOS LIMITADA**, Rut. 76.833.720-9, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por doña Viviana Andrea Toro Vargas, ambas con domicilio en casa matriz ubicada en Avenida Eduardo Frei Montalva número 301, comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Indica en su demanda que comenzó a prestar servicios el 1° de agosto de 2012 como recepcionista de mercadería. Su lugar de trabajo era en calle Januario Espinoza, supermercado Acuenta de la comuna de Linares, región del Maule.

Tenía una jornada ordinaria de trabajo y en cuanto a su remuneración, dice para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, ésta ascendía a \$713.625.-, con contrato indefinido, y agrega que era activo del Sindicato.

En cuanto al término, señala que el 27 de marzo del 2023 se le despide por aplicación de la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, indicando la empresa los motivos de su desvinculación y agrega que el 24 de abril de 2023 firmó finiquito ante Notario efectuando reserva de derechos.

Hace trámites administrativos según refiere en su demanda y en cuanto a la desvinculación propiamente tal, estima que la causal tiene solo hechos ambiguos, y hace un análisis de los hechos que va indicando la misiva en cuanto al escenario económico mundial, la alta inflación, la volatilidad en el tipo de cambio, efectuando entonces las críticas también respecto de lo que menciona respecto a los desafíos futuros de la empresa y el proceso de racionalización de costos, indicando entonces que no está de acuerdo con estos hechos que se señalan, y en lo concreto, dice que la carta no cumple con los requisitos de gravedad, objetividad y temporalidad.

Dice que la causal señalada ni siquiera cumple con los requisitos que el legislador y la jurisprudencia han establecido para ella y que indican simplemente que las circunstancias no emanan de la sola voluntad o responsabilidad de la empresa, sino que deben ser objetivas, graves y permanentes, por lo que debe entenderse en este caso, a falta de justificación de la medida, el despido debe



considerarse de inmediato como improcedente, dado que claramente no se ha explicado de forma objetiva la causal de despido en este caso concreto.

En cuanto al descuento al aporte de seguro de cesantía, citando las normas que lo regulan, estima que debe ser restituido al trabajador.

En concreto, solicita al Tribunal que se declare que el despido del que fue objeto ha sido injustificado y en consecuencia se condene a la demandada a: al pago del recargo del 30% sobre los años de servicio calculados con la base de cálculo propuesta, más devolución del aporte del seguro de cesantía y el pago de las diferencias de la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo y años de servicio pagadas por una incorrecta base de cálculo aplicada por la demandada.

SEGUNDO: En cuanto a la contestación. Que ha comparecido don Cristóbal Shejade Sirhan en representación de la demandada, quien ha contestado verbalmente la acción en esta audiencia, y en primer lugar ha opuesto excepción de incompetencia del Tribunal, señalando que la dirección de la empleadora corresponde a un local ubicado en la comuna de Linares, en Maule, y sin perjuicio de ello, el demandante interpuso la demanda en este Tribunal de Santiago. Hace alusión al artículo 423 del Código del Trabajo, artículo 22 del Código Civil, y artículo 142 del Código Orgánico de Tribunales. Señala que esta situación le ha provocado un perjuicio, particularmente en su derecho a defensa, por cuanto no puede incorporar prueba testimonial y confesional, y en consecuencia, por las razones dadas, el domicilio del empleador, y las normas citadas, solicita al Tribunal que se acoja esta excepción de incompetencia, y se remitan los antecedentes al Tribunal de la ciudad ya mencionada.

En cuanto al fondo, señala en primer lugar que se allana a la base de cálculo propuesta en el libelo y la causal que se indica, pero no en lo que dice en cuanto a la justificación. Dice que en cuanto a la situación económica, hay varios elementos que se han tomado en cuenta, como por ejemplo el aumento de los costos, la disminución de las compras, el aumento de los costos de transporte, y diversos informes y estadísticas dan cuenta de aquello. Por lo tanto, estas situaciones han exigido a la empresa reestructurarse y lograr mayor eficiencia.

Estima que está debidamente justificada la carta y que al haberse invocado el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, además estaba facultado por ley a descontar el aporte del seguro de cesantía. Es el legislador el que autoriza a deducir dichos montos, por lo tanto no puede ordenarse su reintegro porque iría esto en contra de un precepto legal. En consecuencia, pide el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.

TERCERO: En cuanto a la audiencia única. Que con esta fecha hemos celebrado audiencia única con la asistencia de la parte demandante y demandada, se llamó a conciliación la que resultó frustrada, se contestó la demanda verbalmente en los términos que hemos indicado en el considerando anterior, se fijaron hechos pacíficos y a probar, los que se dan por íntegramente reproducidos.

Hechos pacíficos:



- 1) Que efectivamente existió una relación laboral entre las partes a contar del 01 de agosto del 2012, contrato indefinido, con cargo de recepcionista de mercadería.
- 2) Que la demandada puso término al contrato de trabajo el día 27 de marzo de 2023, aplicando la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, cumpliendo las formalidades legales.
- 3) Que el 24 de abril de 2023 se firmó finiquito ante notario con reserva de derechos, en dicha oportunidad se pagó al demandante por indemnización sustitutiva \$656.732.-, por años de servicio \$7.224.052.- y a dicha suma se le descontó por aporte del seguro de cesantía \$1.267.235.-
- 4) Atendido el allanamiento que se efectuó en la contestación de la demanda, la correcta base de cálculo para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo es la suma de \$713.625.- mensuales.

Hechos controvertidos:

- 1) Efectividad de concurrir en la especie los hechos constitutivos de la causal de despido invocada por la demandante. Pormenores y antecedentes.
- 2) Diferencias en el pago de las indemnizaciones. Montos.

CUARTO: En cuanto a la prueba. Que una vez que se fijaron los puntos a probar, las partes incorporaron prueba. La parte demandada, instrumental consistente en copia de contrato y anexos, de carta de despido, constancia en la Dirección del Trabajo, copia de finiquito, liquidaciones de junio de 2022 a marzo del 2023, certificado de seguro de cesantía, resumen IPom del Banco Central y boletines estadísticos. Además se pidió prueba confesional, se citó al demandante a absolver posiciones, no asistió, la parte demandante justifica en el hecho que el demandante estaría en tránsito aún a esta hora y la demandada pide que se haga efectivo el apercibimiento legal.

La parte demandante incorporó prueba documental consistente en copia de carta de aviso, finiquito, acta de comparendo de conciliación y liquidaciones de octubre, noviembre 2022 y marzo de 2023. Solicitó exhibición de documentos, particularmente los estados financieros consolidados 2022, ya sea de Walmart Chile S.A. como holding o de la empresa demandada. Este documento no ha sido traído al proceso, y la demandante pide se haga efectivo el apercibimiento legal respectivo.

QUINTO: En cuanto a las observaciones finales. Las partes efectuaron sus observaciones, una vez que se incorporó toda la prueba ya mencionada.

SEXTO: En cuanto la excepción de incompetencia. Como primera cosa deberemos analizar la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada en esta causa y diremos que la parte demandante evacuó su traslado en su oportunidad pidiendo el rechazo, dice que hay una facultad de opción para el demandante, establecido en el artículo 423 del Código del Trabajo, ha hecho



uso de dicha facultad, además se tiene que tener a la vista el principio de especialidad y las normas mencionadas por la demandada a su juicio protegen al trabajador. En cuanto a la debida defensa, dice que atendidos los argumentos de la carta, la prueba testimonial no es idónea y por lo tanto, estima que no hay ningún tipo de indefensión. En consecuencia, y con los argumentos que ha vertido verbalmente, pide el rechazo de la excepción de incompetencia ya mencionada.

En este punto vamos a tener en especial consideración lo que dispone el artículo 423 del Código del Trabajo, que señala lo siguiente: “Será juez competente para conocer de estas causas el del domicilio del demandado o el del lugar donde se presten o se hayan prestado los servicios, a elección del demandante, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales”. En este punto se va a tener especial consideración que junto con el escrito de reclamación de la parte demandada, se acompañó copia de escritura pública de fecha 14 del mes de enero de 2020 ante Notario Público, y en dicho instrumento que fue aportado por la propia parte demandada al juicio, señala expresamente lo siguiente: “Abarrotes Económicos limitada, rol único tributario número sesenta y seis millones ochocientos treinta y tres mil setecientos veinte guión nueve, en adelante e indistintamente las sociedades, sin perjuicio de las que anteriormente fueron señaladas en esta escritura” y agrega, “Todos domiciliados en Presidente Eduardo Frei Montalva número ocho mil trescientos uno, comuna de Quilicura, Región Metropolitana”.

Por lo tanto, es la propia parte demandada, a través de una escritura pública que ha acompañado al proceso, quien declara expresamente que su domicilio corresponde al recientemente señalado. Esto, a la luz del artículo 423 que ya hemos mencionado, permite concluir que la demanda está correctamente presentada en este Tribunal y recordemos que el artículo 423 establece un derecho de opción, que le compete únicamente al trabajador, y puede elegir tanto el domicilio del demandado, que ya por escritura pública queda refrendado en el proceso, o en el lugar en que prestó los servicios, que es donde aspira la demandada que fuese presentada la demanda, pero la elección no la hace el empleador, según la norma: la elección la efectúa el trabajador y es privativa del trabajador, por lo tanto esta juez estima que esta norma, constando contenida en el Código del Trabajo, debe ser mirada a la luz del principio de la especialidad, por lo tanto prima por sobre cualquier otra norma que en otros cuerpos normativos pueda estar establecidas. De tal manera, esta juez estima que la excepción de incompetencia en este caso, territorial, lo que no fue mencionado por la parte demandada pero a todas luces se trata de aquello, debe ser rechazada, por las razones que ya se han expresado, las normas que se han citado y particularmente, por la prueba que obra en este proceso, tal como se dirá en la parte resolutive del fallo.

SÉPTIMO: En cuanto al término del contrato de trabajo. En este caso es pacífico que el contrato terminó por necesidades de la empresa, ya que se encuentran contenidos aquellos en los hechos pacíficos y la carta que ha sido agregada, señala lo siguiente: “El hecho en qué se funda la causal invocada



consiste en que la producto de distintos factores externos, como el incierto escenario económico mundial, la alta inflación, volatilidad en el tipo de cambio y aumento excesivo de costos logísticos, y sumado a los desafíos futuros que enfrenta el negocio, se ha visto en la necesidad de reorganizar y racionalizar la dotación de quienes prestan servicios en tiendas, lo que nos obliga, en su caso puntual, a prescindir de los servicios que actualmente desempeña en la empresa y dar término a su contrato de trabajo, por la causal señalada”.

Recordemos que el artículo 454 N°1 del Código del Trabajo dispone que es la demandada quien debe acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido. Por lo tanto, según la carga probatoria es la empresa quien debe acreditar a través de la prueba, que los hechos que se han esgrimido en la carta están ajustados a derecho.

En este punto, dada la prueba que se ha aportado al proceso, diremos que se advierte que lo incorporado como copias de contrato, carta de despido, constancia de notificación, finiquito, liquidaciones de sueldo, certificado de aporte al seguro de cesantía, no son para nada útiles para establecer necesidades de la empresa que sean objetivas, permanentes por parte de la empresa.

Ahora bien, el resumen IPom y los boletines estadísticos son meras apreciaciones que se hacen y sí, lo podemos decir de alguna manera, son especulaciones. Lo que se necesita cuando se esgrime una causal de necesidades de la empresa son hechos objetivos, concretos y que vengan acaeciendo dentro de la organización por un tiempo razonable, que haga que el empleador se vea forzado a despedir a este trabajador, pero cuando se establecen hechos inciertos, futuros y externos como lo dice la carta, a modo ejemplar, el incierto escenario económico mundial, la volatilidad del tipo de cambio, parece ser que más bien se trata de una acción voluntaria del empleador y no una forzada. Además, la prueba es absolutamente insuficiente para establecer algún hecho de lo que ha descrito la doctrina y la jurisprudencia que se condigan con el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, y a mayor abundamiento, la parte demandante exigió los estados financieros, los que no fueron aportados al proceso y en ese punto, esta juez estima que es procedente hacer efectivo el apercibimiento legal respectivo.

En este orden de ideas entonces, esta juez estima que en primer lugar que la redacción de la carta no es la adecuada, la prueba aportada es absolutamente insuficiente y no es para nada concordante con lo que se espera para el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, tampoco se ha explicado este proceso que menciona la carta de reorganización y racionalización, no se indica cómo afecta el puesto puntual del demandante ni cómo se reestructura la empresa o cómo se reorganiza, privando cualquier tipo de análisis por parte del Tribunal y también del trabajador, quien queda en indefensión.

Por todas estas razones esta juez estima que el despido es improcedente, por lo tanto se hará lugar al recargo solicitado conjuntamente con la devolución del aporte del seguro de cesantía. Esto, porque la doctrina y la jurisprudencia



mayoritaria o al menos aquella que esta juez estima que es la correcta interpretación, señalan que cuando se estima que el despido es improcedente, no se pueden mantener los efectos del artículo 13 de la ley 19.728, porque estaríamos frente a una inconsistencia. En consecuencia, desapareciendo la causal, no pueden mantenerse los efectos. Esto se ha recogido en diversas sentencias de unificación a modo ejemplar, el rol N° 43.226-2017 del 20 de septiembre de 2018, sin perjuicio de muchas otras de fechas más actuales inclusive.

En consecuencia, se ordenará el recargo más la devolución del aporte del seguro de cesantía.

OCTAVO: En cuanto a las diferencias de las indemnizaciones: Teniendo presente que la parte demandada se allanó a la base de cálculo propuesta por el trabajador, que se recogieron en los hechos pacíficos y contrastando los montos que figuran pagados en el finiquito de contrato de trabajo y la base de cálculo exigida por el trabajador y reconocida por la empresa, solo cabe acoger el pago de aquellos rubros por no existir en definitiva, controversia en esta causa y habiendo sido expresamente reconocido por la empresa que hubo un error en el cálculo por cuanto reconoce que la base de cálculo es mayor a la pagada de manera efectiva, así es que se accederá, tal como se dirá en la parte resolutive del fallo.

NOVENO: En cuanto a la valoración de la prueba: que la valoración de la prueba fue conforme a las normas de la sana crítica, esto es en forma libre, pero sin contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

En cuanto al apercibimiento legal de la confesional de la parte demandada, se dirá que los apercibimientos son facultativos y en este caso, esta juez estima que este apercibimiento no puede ir en contra de prueba expresa que se ha incorporado al proceso y analizada por esta juez y allanamiento además que ha efectuado la parte demandada en su contestación, por lo tanto se rechaza la solicitud por ser privativo del Tribunal, facultativo y en caso alguno, podría lograr modificar la decisión que ya se ha ido manifestando en los considerandos anteriores.

DÉCIMO: En cuanto a las costas. Tomando en consideración que la demandada fue totalmente vencida, tanto en las peticiones contenidas en la demanda en la excepción de incompetencia del Tribunal, y además tomando en especial consideración que fue la propia empresa quien reclamó respecto de la sentencia anticipada, y no ha logrado modificar lo resuelto por el Tribunal, por la insuficiencia de prueba, solo cabe la condena en costas tal como se dirá en la parte resolutive del fallo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 1, 3, 10, 161, 162, 168, 420 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 13 de la ley N°19.728, artículo 423 del Código del Trabajo y demás normas que resulten pertinentes, se resuelve:



- I. Que se rechaza la excepción de incompetencia del Tribunal en razón del territorio opuesta por la parte demandada, por las razones vertidas en la parte considerativa del fallo.
- II. Que se acoge la demanda de don JONNATHAN DANIEL PAREJA ARIAS, en contra de ABARROTES ECONÓMICOS LIMITADA, representada por doña Viviana Andrea Toro Vargas, todos ya debidamente individualizados, y se declara que el despido de fecha 27 de marzo de 2023 es improcedente, y en consecuencia, se ordena el pago de las siguientes prestaciones:
 - a. Recargo legal del 30% del artículo 168, por la suma de \$2.354.962.-
 - b. Devolución del aporte al seguro de cesantía, por la suma de \$1.267.235.-
 - c. Pago de la diferencia de la indemnización por años de servicio, por la suma de \$625.823.-
 - d. Pago de la diferencia de la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, por \$56.893.-
- III. Las sumas ordenadas pagar, serán con los reajustes e intereses que se establecen en el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda.
- IV. Que se condena en costas a la demandada, las que se regulan en la suma del 10% de lo ordenado pagar en la presente sentencia.

Ejecutoriada que sea esta sentencia, se ordena cumplir con ella dentro de quinto día, en caso contrario, proceder de acuerdo a lo que dispone el artículo 462 del Código del Trabajo.

Se ordena el registro y archivo de los antecedentes en su oportunidad.

Sentencia dictada por Ivette Renée Mourguet Besoain, Jueza Titular del Segundo Juzgado de Letras de Trabajo de Santiago.



